CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
30 MAR. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 11:45h.

Dictamen negativo aprobado por **unanimidad**, recaído en el Proyecto de Ley **2800/2022-CR** que propone la ley de protección y defensa de la denominación "Machupicchu" correspondiente al santuario histórico de Machupicchu

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Ha sido remitido, para dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos el Proyecto de Ley 2800/2022-CR, presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso a iniciativa del congresista Alejandro Soto Reyes, por el que se propone la ley de protección y defensa de la denominación "Machupicchu" correspondiente al santuario histórico de Machupicchu.

En la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el lunes 27 de marzo de 2023, el dictamen negativo fue aprobado por **UNANIMIDAD,** con 9 votos a favor de los señores congresistas Elías Marcial Varas Meléndez, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, Auristela Ana Obando Morgan, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Guillermo Bermejo Rojas, Sigrid Tesoro Bazán Narro, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante Figari y María del Pilar Cordero Jon Tay quien votó por la licencia del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay.

I. SITUACIÓN PROCESAL

a) Antecedentes procedimentales

El Proyecto de Ley **2800/2022-CR** fue presentado ante el Área de Trámite Documentario el 15 de agosto de 2022. Fue decretado e ingresado a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos como única comisión dictaminadora, el 23 de agosto de 2022, para su estudio y dictamen.

b) Antecedentes parlamentarios

Se ha realizado una búsqueda en la página web del Congreso de la República, no encontrando de antecedentes parlamentarios relacionados con la materia de la propuesta legislativa.

c) Opiniones solicitadas

Al Proyecto de Ley **2800/2022-CR** se solicitaron las siguientes opiniones:

- Mediante Oficio PO 004-2022-2023/CODECO-CR de fecha 29 de agosto de 2022, se solicitó pedido de opinión al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/03/2023 09:56:38-0500

- Mediante Oficio PO 005-2022-2023/CODECO-CR de fecha 29 de agosto de 2022, se solicitó pedido de opinión al Ministerio de Cultura.

- Mediante Oficio PO 006-2022-2023/CODECO-CR de fecha 29 de agosto de 2022, se solicitó pedido de opinión al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

- Mediante Oficio PO 054-2022-2023/CODECO-CR de fecha 10 de octubre de 2022, se solicitó pedido de opinión al Gobierno Regional del Cuzco.

d) Opiniones recibidas

Hasta la elaboración del presente dictamen se han recibido las siguientes opiniones:

- Mediante Oficio 562-2022-SG/MC de fecha 29 de septiembre de 2022, suscrito por el Secretario General del Ministerio de Cultura, se remite el Informe 1156-2022-OGAJ/JMC, Informe 549-2022-DGPC/MC y el Informe 513-2022-DGPA/MC.

- Mediante Oficio 696-2022-GR de fecha 25 de octubre de 2022, suscrito por el Gerente Regional del Gobierno Regional del Cuzco, se remite el Informe 360-2022-GR CUSCO/GERCETUR-SGG.

- Mediante Oficio 712-2022-MINCETUR/DM de fecha 07 de noviembre de 2022, suscrito por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que adjunta el Informe 0046-2022-MINCETUR/SG/AJ-MIC

- Mediante Oficio 337-2022-GEG/INDECOPI de fecha 10 de noviembre de 2022, suscrito por el Gerente General (e) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), se remite el Informe 17-2022-DSD/INDECOPI y el Informe 1098-2022-MINCETUR/SG/AJ.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 2800/2022-CR, por el que se propone la ley de protección y defensa de la denominación "Machupicchu" correspondiente al santuario histórico de Machupicchu. *El contenido del texto dispositivo del proyecto de ley es la siguiente:*

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto proteger la denominación "Machupicchu" correspondiente al Santuario Histórico de Machupicchu.

Artículo 2. Protección de la denominación "Machupicchu"

La denominación "Machupicchu" no puede usarse en ningún otro monumento, sea natural o artificial.

Artículo 3. Aplicación en la propiedad industrial
La presente Ley no se aplica al registro de marcas o nombres comerciales siempre que no induzcan a suponer que se trate de un contexto alterno al Santuario Histórico de Machupicchu.

Artículo 4. Sanciones
4.1 La infracción de la presente ley se sanciona con cinco (5) unidades impositivas tributarias.
4.2 El reglamento establece las disposiciones para la aplicación de dicha sanción.

Artículo 5. Labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI
Corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. *El Poder Ejecutivo emite el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor a sesenta días calendario contados desde su publicación.*

III. MARCO NORMATIVO

Legislación nacional

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Reglamento del Congreso de la República.
- Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571.
- Decreto Supremo 006-2017-PCM que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor.
- Resolución Ministerial 248-2019-PCM que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor.
- Decreto Supremo 024-2017-PCM que aprueba el Plan Nacional de Protección de los Consumidores 2017 – 2022.
- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y modificatorias.

IV. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY

4.1. Análisis técnico

Al referirnos a los signos distintivos que incluyen las marcas de productos y de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, entre otros, éstas ayudan a los agentes económicos a diferenciar y posicionar sus productos y servicios en los mercados nacional e internacional.

En el caso de las marcas, éstas identifican el origen empresarial de los productos y servicios, transmiten información a los consumidores, evitan el riesgo de confusión entre estos y garantizan la leal y libre competencia en el mercado.

Por su parte, las marcas de producto y de servicio permiten que los consumidores puedan distinguir los productos y servicios de una y otra empresa competidora y que éstos sean asociados a una calidad deseada. También, juegan un papel determinante en la estrategia de ingresar a nuevos mercados.

Mientras que las marcas colectivas permiten que los miembros de una organización de productores puedan beneficiarse de la reputación adquirida sobre la base de la procedencia geográfica de los productos o servicios u otra característica común, como

la materia prima, los procesos de producción, la calidad, la aplicación de métodos ancestrales o tradicionales, entre otros; por lo que promueve la estandarización de los productos o servicios. Además, de ser un instrumento que promueve las alianzas y asociatividad entre los productores.

Así también, las marcas de certificación permiten garantizar a los consumidores que los productos y servicios a los cuales se aplican estos signos distintivos, cumplen con determinadas características o cualidades que son controladas y supervisadas por el titular de la marca, generando confianza en las transacciones de mercado.

Finalmente, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas anuncian a los consumidores que los productos procedentes de una determinada zona geográfica cuentan con determinada reputación, calidad o cualidades que se deben al medio.

De ello podemos inferir que los derechos de propiedad intelectual, en general, y los signos distintivos en particular, son fundamentales para el desarrollo de una estrategia de promoción comercial.

4.1.1. Problemática que se pretende atender

Tal como lo señala la propia iniciativa legislativa, que reproducimos a continuación: [1]
El 25 de julio de 2022, un programa de televisión promocionó el denominado "Machupicchu limeño", ubicado en el distrito de San Buenaventura de la provincia de Canta, departamento de Lima. En dicho programa se evidenció una construcción con representaciones relativas al imperio incaico, la cultura Chavín, réplicas del Complejo Arqueológicos Chan Chan, entre otras representaciones que prácticamente caricaturizan nuestro milenario pasado prehispánico.


¿Cuánto cuesta ir al 'Machu Picchu limeño' y cómo llegar al famoso lugar turístico?

[1] *Fuente: https://larepublica.pe/turismo/2022/ASRCR, por medio del cual se hizo una denuncia sobre la promoción realizada en el programa "Sábado con Andrés", conducido por el Sr. Andrés Hurtado, promocionó la existencia de un "Machupicchu Limeño".*

Cabe mencionar que dicha mención a un falso Machupicchu atenta contra la historia del Tahuantinsuyo puesto que el Santuario Histórico de Machupicchu es considerado en la actualidad una de las maravillas del mundo y patrimonio cultural de la humanidad.

Asimismo, autoridades del Cusco ya han manifestado su disconformidad con el mal uso de la denominación, la cual desvirtúa la grandiosidad del Santuario:

> ***"Autoridades rechazan promoción de atractivo "Machupicchu limeño"***
> *Un centro recreacional ubicado en la provincia de Canta en la sierra de Lima, ha desatado polémica por la construcción de sus instalaciones similares a diferentes restos arqueológicos del Perú.*
> *En dicho local se pueden apreciar simulaciones de muros incas, los andenes de Choquequirao. Y hasta una réplica del Intihuatana que se ubica en Machupicchu. Así como, cabezas clavas de la cultura Chavín de Huántar.*
> *Por este motivo los dueños de este espacio vienen promocionando el lugar como un nuevo atractivo turístico denominado el "machupicchu limeño".*
> *(...) el sub gerente de Cultura de la municipalidad del Cusco también mostró su rechazo ante la denominación de "machupicchu limeño". Por ello, hizo un llamado a la nueva ministra de cultura Betssy Chávez para que intervenga de inmediato (...)"*[2]

Estas consideraciones obligan a establecer lineamientos de protección a fin de que cualquier construcción novedosa sea denominada como "un segundo Machupicchu" o como, en el caso que mencionamos, "Machupicchu limeño".

Esta realidad demuestra que existe un vacío jurídico para proteger la denominación que corresponde exclusivamente al Santuario Histórico de Machupicchu.

Por ello, la presente propuesta tiene como objeto proteger la denominación "Machupicchu" correspondiente al Santuario Histórico de Machupicchu, de tal manera que dicha denominación no puede usarse en ningún otro monumento, sea natural o artificial a fin de no confundir a los visitantes nacionales o extranjeros.

En atención a que con esta norma no se pretende limitar las reglas sobre propiedad industrial, la propuesta de ley no se aplica al registro de marcas o nombres comerciales siempre que no induzcan a suponer que se trate del Santuario Histórico de Machupicchu.

En caso de infringir dicha medida, se aplicará una sanción que asciende a cinco (5) unidades impositivas tributarias, debiendo el reglamento establecer las disposiciones para la aplicación de dicha sanción. Para ello, se dispone que corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi la fiscalización y sanción a los infractores de la norma.

¿Por qué la protección a la denominación "Machupicchu"? porque se trata de una de las maravillas del mundo, es un patrimonio cultural de la humanidad y es el principal atractivo del Perú y uno de los primeros de sudamérica.

---

[2] https://elbuho.pe/2022/08/autoridades-rechazan-promocion-de-atractivo-machupicchu-limeno/
Revisado el 10 de agosto de 2022.

4.1.2. Análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad del proyecto de ley

a) Control del cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 75 y 76

Conforme a lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, se ha verificado que el Proyecto de Ley 2800/2022-CR cumple con las exigencias señaladas en los mencionados artículos: i) la exposición de motivos contiene los fundamentos del proyecto de ley, ii) los efectos de la vigencia de la norma que se propone sobre el ordenamiento jurídico; y, iii) así como el análisis costo beneficio.

b) Relación de la iniciativa con la Agenda Legislativa 2022-2023 y con el Acuerdo Nacional

El Congreso de la República aprobó la Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023, en cumplimiento de segundo párrafo del artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República que establece que, al inicio del periodo anual de sesiones, los grupos parlamentarios presentan una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho periodo.

La Agenda Legislativa es un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en materia legislativa y que el debate de los proyectos de ley allí contenidos tienen prioridad, tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso.

La Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023, tiene relación directa con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el mismo que establece como Primer Objetivo la Democracia y Estado de Derecho, y es bajo la Política de Estado 3 de "Afirmación de la identidad nacional" así en su literal a) precisa que el Estado promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país. La Agenda Legislativa 2022-2023 ha establecido que deben priorizarse los proyectos de ley que contengan medidas para promover la productividad, competitividad y el desarrollo económico, así como medidas a favor de los consumidores.

4.1.3. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma

El proyecto de ley que propone la ley de protección y defensa de la denominación "Machupicchu" correspondiente al santuario histórico de Machupicchu, no especifica otros supuestos en el ámbito del registro de marcas y nombres comerciales podría aplicar, lo cual podría acarrear problemas de incertidumbre jurídica para los agentes económicos, por ejemplo, a quienes son titulares de derechos de propiedad industrial.

Teniendo en consideración lo regulado por la Decisión 486, la cual constituye el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" para los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, esto es, para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, normativa que forma parte del marco normativo del Derecho Comunitario Andino; dicha Decisión no contempla la prohibición de registro de marcas y nombres comerciales por el solo hecho de estar constituidas por símbolos religiosos o monumentos históricos, toda vez que, actualmente en el INDECOPI cuenta con marcas inscritas que incluyen en su conformación distintas denominaciones que aluden a monumentos históricos o restos arqueológicos, tenemos por ejemplo: Machu Picchu Reservations y logotipo

(certificado 96207), Machu Picchu Sanctuary Lodge y logotipo (certificado 61419), Protector de Machu Picchu y logotipo (certificado 17544), Machu Picchu A1 y logotipo (certificado 77957), The Grand Machupicchu Train y logotipo (certificado 109564), Machupicchu Sport y logotipo (certificado 91837), entre otros.

En atención a lo expuesto, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del proyecto de ley vulnera el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En efecto, vendría a constituir un supuesto de prohibición de registro de marcas y nombres comerciales que excede y por lo tanto resulta contrario a lo dispuesto en la Decisión 486.

4.2. Análisis de las opiniones e información recibida.

4.2.1. Ministerio de Cultura

Remite el Oficio 562-2022-SG/MC de fecha 29 de setiembre de 2022, el mismo que contiene el Informe 001156-2022-OGAJ/MC de fecha 27 de setiembre de 2022, donde se indica lo siguiente:

> "(...) *la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble señala que dicha dirección general no tiene competencia para emitir opinión técnica respecto a la protección de las denominaciones, marcas o signos distintivos, función que corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.*
> *No obstante, considera necesario precisar que la utilización del nombre "Machupicchu", para promocionar espacios recreacionales o manifestaciones artísticas podría crear algún tipo de confusión entre el público que visita los mismos, pues pensaría que forman parte del patrimonio cultural administrado por el Ministerio de Cultura, razón por la cual recomienda que el Congreso de la República solicite a INDECOPI un sustento técnico legal para la protección de la denominación "Machupicchu", con el objetivo de mejorar la exposición de motivos de la propuesta legislativa.*
> *De otro lado, la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través del Informe 000549-2022-DGPC/MC señala lo siguiente:*
> *i. El Proyecto de Ley tiene por objeto proteger la denominación "Machupicchu" restringiendo su uso con respecto a estructuras o edificaciones de origen natural y/o artificial. Para ello, la propuesta normativa en su artículo 2 limita el uso de dicha denominación aplicando el término "Monumento" entendiendo el mismo como construcción que se erige en recuerdo de una persona o hecho memorable; lo cual podría generar confusión ya que el mismo término se aplica a un bien con valor cultural. Asimismo, se debería ampliar su aplicación para cualquier tipo de estructuras o edificaciones de origen natural y/o artificial de cualquier sitio arqueológico, independientemente de ser o no declarado patrimonio mundial.*
> *ii. Respecto a su artículo 3 este delimita la aplicación en el uso de la denominación "Monumento", no siendo aplicado su uso para el registro de marcas o nombres comerciales. En ese sentido, se mantendrían sus usos para determinados productos y servicios, así como para la actividad económica comercial siempre que no sea ligado al Santuario Histórico de Machupicchu. Al respecto, considera materialmente imposible controlar dicha situación, ya que, a la fecha, la denominación "Machupicchu se puede encontrar en diversos aspectos de la actividad económica e incluso como nombre propio de personas; en ese sentido, de promulgarse esta propuesta normativa, podría considerarse*

discriminatoria contra aquellos que, a partir de su promulgación tengan prohibido denominar como "Machupicchu" a cualquier tipo de negocio o persona, frente a los que ya tienen su nombre consignado o registrado. Creemos que, por el contrario, un restaurante denominado "Machupicchu" que tenga como parte de su atractivo una réplica del Santuario Histórico a gran escala podría fomentar su difusión y conocimiento.

iii. En tal sentido, considera que el verdadero santuario histórico no se perjudica, ni perjudicará en manera alguna si su nombre es utilizado para otras actividades económicas. De prohibirse, podría de alguna manera frenarse la actividad comercial y/o turística. Al respecto recomienda que se solicite la opinión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

iv. Por último, indica que el Ministerio de Cultura no cuenta con competencias para fiscalizar y/o realizar acciones de control en el uso de la denominación de "Machupicchu" u otro sitio arqueológico y/o histórico, sino solo y en cuanto tenga relación con el mismo de manera directa. Además, ya el conocimiento generalizado de la población sabe que el Santuario Histórico de Machupicchu se encuentra en Cusco y que cualquier replica no pasa de ser solo una imitación del mismo sin un valor cultural.

De la opinión de esta Oficina General

De manera adicional, esta Oficina General debe agregar que la Constitución Política del Perú, conforme a su artículo 21, señala que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública; los mismos que están protegidos por el Estado.

Por su parte, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y modificatorias, señala que se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo.

Asimismo, en el artículo IV del precitado Título Preliminar se declara de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes.

En atención a ello, el artículo 7 de la Ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura y modificatoria, señala que es función de este ministerio realizar acciones de declaración, delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación.

*Estando a lo expuesto, se advierte que la Dirección General de Patrimonio Cultural, dentro del ámbito de sus funciones, ha determinado que **el uso del nombre Machupicchu en actividades económicas no perjudica al santuario histórico.***

Sin perjuicio de lo que se indica, estando a que el objeto de la propuesta normativa gira en torno a un asunto que es de competencia de INDECOPI, como es lo relativo al respeto de las denominaciones, marcas o nombres comerciales, corresponderá a dicha institución el análisis de las disposiciones de la propuesta

normativa con la finalidad de establecer si aquellas se enmarcan dentro del ámbito de las normas vigentes sobre la materia.

La Comisión ha evaluado la opinión emitida por el Ministerio de Cultura y coincide al señalar que ***el verdadero santuario histórico no se perjudica, ni perjudicará en manera alguna si su nombre es utilizado para otras actividades económicas***. Así también coincide que el sector no tiene competencia para emitir opinión técnica sobre la protección de las denominaciones, marcas o signos distintivos, conforme lo normado por la Ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura y por el Decreto Supremo 005-2013-MC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.

4.2.2. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

El Indecopi remite el Oficio 00337-2022-GEG/INDECOPI de fecha 10 de noviembre de 2022, el mismo que contiene el Informe 0017-2022-DSD/INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2022, donde señalan lo siguiente:

> ***"(...) Sobre la incidencia de la propuesta en el régimen de Propiedad Industrial***
>
> *El Proyecto de Ley, en su artículo 3, señala que la propuesta normativa "(...) no se aplica al registro de marcas o nombres comerciales siempre que no induzca a suponer que se trate de un contexto alterno al Santuario Histórico de Machupicchu".*
>
> *Una lectura o interpretación contario sensu de la propuesta establecida en el artículo 3 del Proyecto implica que la prohibición de usar la denominación "Machupicchu" (artículo 2 del Proyecto) sí aplica al registro de marcas y nombres comerciales cuando se induzca a suponer que se trata de un contexto alterno al Santuario Histórico de Machupicchu.*
>
> *Así, un primer supuesto, en el que aplicaría dicha propuesta es al momento de evaluar las solicitudes de registro de marcas y nombres comerciales. Visto de ese modo, la propuesta normativa tiene la vocación de aplicar como un supuesto de prohibición de registro de marcas y nombres comerciales.*
>
> *Adicionalmente, conviene referir que la propuesta no especifica qué otros supuestos en el ámbito del registro de marcas y nombres comerciales podría aplicar (por ejemplo, nulidad de registros), lo cual trae un problema adicional de incertidumbre jurídica para los agentes económicos; en particular, titulares de derechos de propiedad industrial.*
>
> *Sobre el particular, conviene recordar que la DSD es la autoridad nacional competente en sede administrativa, de manera primaria y exclusiva, para otorgar derechos sobre signos distintivos, entre estos, las marcas, tanto de conformidad con el Decreto Legislativo 1033 como por la Decisión 486.*
>
> *Es importante precisar, además, que la Decisión 486 constituye el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, esto es, para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, normativa que forma parte del Derecho Comunitario Andino, el mismo que*

tiene un efecto directo y supranacional2 sobre la legislación nacional, teniendo preeminencia sobre esta.

En particular, conviene señalar que toda solicitud de registro de una marca se encuentra supeditada a que la misma no incurra en alguna prohibición de registro prevista en la Decisión 486; esto es, en una prohibición absoluta de registro (por ejemplo, la prohibición de registrar como marcas signos exclusivamente descriptivos, genéricos, carentes de distintividad, engañosos, entre otros) o en una prohibición relativa de registro (por ejemplo, que el signo solicitado resulte confundible con una marca registrada o solicitada con anterioridad, entre otros). Incluso, una solicitud de registro de marca puede ser denegada cuando se tenga indicios razonables que permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En ese orden de ideas, el actual régimen de prohibiciones de registro previsto en la Decisión 486 no contempla la prohibición de registro de marcas y nombres comerciales por el solo hecho de estar constituidas por símbolos religiosos o monumentos históricos.

Por ejemplo, en el Registro de Propiedad Industrial a cargo del Indecopi se encuentran inscritas desde hace muchos años marcas que incluyen en su conformación distintas denominaciones que aluden a monumentos históricos o restos arqueológicos, tales como: Hotel Nazca Lines (certificado 5603), Nazca y logotipo (certificado 45864), Kuelap & Adventure Tour Operador y logotipo (certificado 73595), Hotel Kuelap S.A.C. y logotipo (certificado 74194), Chan Chan (certificado 50475), Huaca Pucllana (certificado 30661), Gran Caral (certificado 105862), Caral Tours…y logotipo (certificado 86222), Sipán y logotipo (certificado 7084), Festival Señor de Sipán (certificado 78216), Salón Sipán (certificado 87878), Machu Picchu Reservations y logotipo (certificado 96207), Machu Picchu Sanctuary Lodge y logotipo (certificado 61419), Protector de Machu Picchu y logotipo (certificado 17544), Machu Picchu A1 y logotipo (certificado 77957), The Grand Machupicchu Train y logotipo (certificado 109564), Machupicchu Sport y logotipo (certificado 91837), entre otros.

Esto es posible por cuanto se trata de signos que se encuentran conformados por elementos denominativos, gráficos y/o cromáticos que en su conjunto les otorgan carácter distintivo, permitiéndoles cumplir con su rol de marca en el mercado.

En atención a lo expuesto, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del proyecto de ley vulnera el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En efecto, vendría a constituir un supuesto de prohibición de registro de marcas y nombres comerciales que excede y por lo tanto resulta contrario a lo dispuesto en la Decisión 486.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene tener presente que en el marco de las prohibiciones de registro antes referidas (Decisión 486), es posible evitar el registro como marca o nombre comercial de signos que pueden resultar descriptivos o engañosos en relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, así como cuando dichas solicitudes de registro resultan contrarias a la leal y honesta competencia.

Finalmente, siendo que la esencia de la propuesta normativa es velar por un monumento que constituye patrimonio cultural de la nación, conviene señalar que desde nuestro punto de vista no corresponde encargar su aplicación, fiscalización y sanción de infractores, al Indecopi, entidad que no tiene competencia en dicha materia.

CONCLUSIONES

De lo detallado anteriormente, podemos concluir que:

1) La Dirección de Signos Distintivos es la instancia del Indecopi encargada de administrar el sistema de derechos sobre marcas de producto o de servicio, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, especialidades tradicionales garantizadas y de cualquier otro signo que la legislación sujete a su responsabilidad.

2) Una lectura o interpretación contario sensu de la propuesta (artículo 3 del Proyecto) implica que la prohibición de usar la denominación "Machupicchu" (artículo 2 del Proyecto) sí aplica al registro de marcas y nombres comerciales cuando se induzca a suponer que se trata de un contexto alterno al Santuario Histórico de Machupicchu.

3) El actual régimen de prohibiciones de registro previsto en la Decisión 486 no contempla la prohibición de registro de marcas y nombres comerciales por el solo hecho de estar constituidas por símbolos religiosos o monumentos históricos.

4) El artículo 3 del Proyecto de Ley vulnera el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al exceder lo dispuesto en la Decisión 486. Además, genera incertidumbre jurídica de si su aplicación afecta únicamente el régimen de solicitudes de registro o si también el régimen de nulidad de registros.

5) Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de prohibiciones previstas en nuestra legislación (Decisión 486), es posible evitar el registro como marca o nombre comercial de signos que pueden resultar descriptivos o engañosos en relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, así como contrarios a la leal y honesta competencia.

6) Siendo la esencia de la propuesta normativa velar por un monumento que constituye patrimonio cultural de la nación, conviene señalar que desde nuestro punto de vista no corresponde encargar su aplicación, fiscalización y sanción de infractores, al Indecopi, entidad que no tiene competencia en dicha materia.

La Comisión después de haber evaluado cada una de las conclusiones expuestas por el INDECOPI como organismo competente para emitir opinión técnica sobre la protección de las denominaciones, marcas o signos distintivos, coincide en que **la propuesta legislativa vulneraría el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina al exceder lo dispuesto en la Decisión 486 "Régimen sobre la propiedad industrial"**. Solo sería posible prohibir el registro como marca o nombre comercial de signos que pueden resultar descriptivos o engañosos en relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, así como contrarios a la leal y honesta competencia.

4.2.3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Remite el Oficio 00712-2022-MINCETUR/DM de fecha 7 de noviembre de 2022, el mismo que contiene el Informe 0046-2022-MINCETUR/SG/AJ-MIC de fecha 24 de octubre de 2022, donde señala lo siguiente:

> *"(...) Con relación al sector competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley, la DPDT considera que de acuerdo a lo señalado en el literal g) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI aprobado con Decreto Supremo 104-2021- PCM6 y el artículo 4 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, aprobado por Resolución 000063-2021-PRE/INDECOPI, "es competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi pronunciarse sobre el proyecto de ley ya que está relacionado con materias de propiedad intelectual, protección al consumidor, (...)."*
>
> *Al respecto, también resulta pertinente tener en cuenta que en virtud a lo establecido en el literal b) del artículo 7 de la Ley 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, modificada por el Decreto Legislativo 1255, dicha entidad tiene como función exclusiva "Realizar acciones de declaración, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación."*
> *En ese sentido, corresponde que el Ministerio de Cultura, por ser la entidad competente emita la respectiva opinión sobre el Proyecto de Ley, que tiene por objeto proteger la denominación "Machupicchu" correspondiente al Santuario Histórico de Machupicchu, considerado una de las maravillas del mundo y patrimonio de la humanidad.*
> *3.19 De acuerdo a lo antes señalado, esta Oficina General de Asesoría Jurídica coincide con el pronunciamiento del Viceministerio de Turismo, en el sentido que corresponde que Indecopi se pronuncie sobre el proyecto de ley.*

La Comisión después de haber evaluado la opinión emitida por el MINCETUR, coincide en que es el INDECOPI el ente competente para emitir opinión técnica sobre la protección de las denominaciones, marcas o signos distintivos, opinión a la que ya nos hemos referido líneas arriba.

4.2.4. Gobierno Regional de Cusco

Remite el Oficio 696-2022-GR CUSCO/GERCETUR-GR de fecha 7 de noviembre de 2022, el mismo que contiene el Informe 0360-2022-GR CUSCO/GERCETU-SGG de fecha 21 de octubre de 2022, donde se concluye y recomienda que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura, a través del área funcional del parque Nacional de Machupicchu se encarga de la gestión y conservación del patrimonio cultural del parque Arqueológico Nacional de Machupicchu santuario Histórico de Machupicchu garantizando su intangibilidad, inalienabilidad y autenticidad de acuerdo a estándares internacionales, recomendaciones de la UNESCO y en función a los lineamientos del Plan Maestro, documento rector que fue aprobado mediante Resolución Ministerial 134-2015-MC y cuya implementación es el compromiso

inmediato del Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente.

Señalan que, si bien es cierto, que los emprendimientos turísticos sostenibles son beneficiosos para el desarrollo de los pueblos, ya que son inversiones que generan empleo, fomento de la inversión privada, mejora de la calidad de vida de la población anfitriona, promueve la calidad del destino, cultura, educación, sin embargo, la denominación no corresponde a la autenticidad del producto ofertado a la competitividad y ética empresarial, por lo que la declara viable.

La Comisión considera que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es el ente competente para emitir opinión técnica sobre la protección de las denominaciones, marcas o signos distintivos y tal como se ha revisado líneas arriba, la opinión de dicha entidad sobre la viabilidad del proyecto de ley materia de análisis es negativa.

El Gobierno Regional del Cusco reconoce no tener competencia, sin embargo señala que el proyecto de ley bajo análisis es viable sin percatarse que se vulneraría el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al no contemplar la prohibición de registro de marcas y nombres comerciales por el sólo hecho de estar constituidas por símbolos religiosos o monumentos históricos, además de generar incertidumbre jurídica si se aplicaría a solicitudes de registros o también a la nulidad de registros. Toda vez que, como lo ha dicho la autoridad competente, es posible evitar el registro como marca o nombre comercial de signos que pueden resultar descriptivos o engañosos en relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, así como contrarios a la honesta y leal competencia.

4.3. Análisis Costo Beneficio.

La iniciativa legislativa adolece de un estudio cuantitativo que permita evaluar el impacto y efecto de la propuesta normativa, situación que permitiría a esta comisión cuantificar los costos, limitándose el ítem de exposición de motivos al señalar que el proyecto de ley no generará gastos al erario nacional. Asimismo, en relación al beneficio del proyecto ley precisa que beneficiaria para una mejor protección del Santuario Histórico de Machupicchu, sin tomar en cuenta lo normado por la Decisión 486, la misma que no contempla la prohibición de registro de marcas y nombres comerciales por el solo hecho de estar constituidas por símbolos religiosos o monumentos históricos.

V. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones antes expuestas la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la no aprobación de la proposición y envío al **ARCHIVO** del Proyecto de Ley **2800/2022-CR**.

Salvo mejor parecer.
Dese cuenta.
Sala de Comisión.

27 de marzo de 2023.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BAZAN NARRO Sigrid Tesoro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2023 10:30:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VARAS MELENDEZ Bias Marcial FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/03/2023 13:13:18-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CORDERO JON TAY Maria Del Pilar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/03/2023 18:53:45-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/03/2023 14:36:56-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BERMEJO ROJAS Guillermo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/03/2023 16:26:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CICCIA VASQUEZ Miguel Angel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/03/2023 18:03:57-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OBANDO MORGAN Auristela Ana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/03/2023 15:15:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2023 09:57:12-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2023 10:14:43-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 2 **de** MAYO **de** 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo,
pasó al archivo.

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ACTA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Plataforma Microsoft Teams
Lunes 27 de marzo de 2023

Resumen de acuerdos:

- Se aprobó por unanimidad el Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3339/2022-CR.
- Se aprobó por unanimidad el Dictamen recaído en los proyectos de ley 3316/2022-CR y 3734/2022-CR.
- Se aprobó por mayoría el Dictamen de no aprobación recaído en el Proyecto de Ley 022/2021-CR.
- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de no aprobación recaído en el Proyecto de Ley 2800/2022-CR.
- Se aprobó por unanimidad el Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 13 de marzo de 2023.
- Se aprobó por unanimidad la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos de la sesión.

Desde la plataforma *Microsoft Teams*, siendo las 11 h 10 min del día lunes 27 de marzo de 2023, verificado que se contaba con el quórum reglamentario que, para la presente sesión, era de 6 congresistas, el congresista Elías Marcial VARAS MELÉNDEZ, presidente de la Comisión, dio inicio a la décima primera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023, con la asistencia de los congresistas titulares TUDELA GUTIÉRREZ, Adriana; BARBARÁN REYES, Rosangella; BAZAN NARRO, Sigrid; BERMEJO ROJAS, Guillermo; CICCIA VÁSQUEZ, Miguel Ángel; MORANTE FIGARI, Jorge y OBANDO MORGAN, Auristela. Participaron los congresistas accesitarios LUNA GÁLVEZ, José y CORDERO JON TAY, María.

También se dio cuenta de las licencias/justificaciones de inasistencias de los congresistas CORDERO JON TAY, Gustavo; ALEGRÍA GARCÍA, Arturo; TAIPE CORONADO, María; FLORES ANCACHI, Jorge y CALLE LOBATÓN, Digna.

I. ACTA

El PRESIDENTE puso a consideración el acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 13 de marzo de 2023, cuya dispensa de su lectura fue aprobada en su oportunidad; no habiendo observación, se dejó constancia que el acta fue aprobada por unanimidad.

II. DESPACHO

No hubo despacho

III. INFORMES

No hubo informes

IV.PEDIDOS

No hubo pedidos

V. ORDEN DEL DÍA

El PRESIDENTE indicó que, como primer punto del orden del día, se tendría el tema: *Rol de la superintendencia nacional de servicios de saneamiento (SUNASS), frente a la situación de emergencia y sus repercusiones en los usuarios.*

Al respecto, refirió que tras las lluvias intensas en las últimas semanas y el desborde de ríos provocados por la presencia del ciclón Yaku, la continuidad de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas afectadas a nivel nacional en muchos casos colapsaron y los usuarios fueron los más afectados. Ante ello, dijo que, si bien son temas originados por la naturaleza, pero mantener informada a la población usuaria sobre el período de duración de la restricción del servicio de agua potable es un derecho que tienen los usuarios. Al mismo tiempo, señaló que es necesario evaluar los planes de contingencia para estos casos.

Por otro lado, refirió que es también es importante saber si el regulador monitoreó las acciones de las áreas técnicas municipales, para que realicen la gestión de reposición y restablecimiento del sistema de agua potable y, de esta manera, continuar con la prestación de los servicios de saneamiento, dado la importancia del servicio básico para el normal desarrollo de la vida.

En esa preocupación, se ha invitado al señor Mauro Orlando Gutiérrez Martínez, superintendente de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para que explique las siguientes preguntas: qué acciones ha realizado en su sector, qué resultados ha obtenido y, sobre todo, qué medidas realizará, ya que se tiene la amenaza en el futuro del fenómeno El Niño. Seguidamente, le dio la bienvenida y le otorgó el uso de la palabra.

El señor GUTIÉRREZ MARTÍNEZ mediante el uso de diapositivas trató sobre los siguientes puntos: rol de la Sunass ante el estado de emergencia por las lluvias e inundaciones; implicancias del ciclón Yaku y los fenómenos El Niño; eventos climáticos en el Perú; aparición del ciclón Yaku, periódicamente "El Niño"; efectos del fenómeno El niño costero 2017 en el saneamiento. Al mismo tiempo dio detalle sobre las diferentes acciones que ha realizado en atención y monitoreo en los departamentos, provincias y distritos del país, donde se presentaron inundaciones por el ciclón Yaku. Al respecto, refirió que se ha realizado las coordinaciones con las municipalidades y con otros sectores.

Asimismo, abordó sobre los temas de la normatividad existente para la situación de emergencia, reserva de gestión de riego de desastre y sobre el uso excepcional por la declaratoria de emergencia establecido en el RGT, al mismo tiempo, desarrolló el tema del reglamento de Calidad cuando hay desabastecimiento.

Siguiendo con la exposición, trató sobre el contenido del mapa de alertas en el servicio de saneamiento por lluvias y activación de quebrada. Sobre ello, dijo que en febrero de 2023 se presentó el mapa de alertas ante la ocurrencia de lluvias intensas y se advirtió que más de 300 prestadores de agua potable podrían ser afectados por los huaicos. Así también, abordó sobre el tema de la capacitación a EPS, del uso excepcional de fondos para garantizar la continuidad de los servicios, sensibilización a los usuarios ante las aguas pluviales, de las acciones en el ámbito de Sedapal S.A y recalcó de las consecuencias que arriba la problemática del agua residual.

Finalmente, en sus conclusiones, refirió los siguientes aspectos: 1. Se requiere la coordinación directa entre las empresas de energía eléctrica y las empresas de agua (EP), y que se priorice el abastecimiento de los servicios de energía eléctrica para el bombeo de agua. 2. Es necesario priorizar el uso de información de instituciones formales para evitar los "*fake news*". 3. Se debe apoyar en la comunicación de las zonas prioritarias de rehabilitación cuando se tienen eventos masivos de afectación de servicios

El PRESIDENTE mostró preocupación por la afectación que ha ocasionado el ciclón Yaku en la región Ancash y alertó sí cada empresa sabe en la situación de riesgo que están sus pozos y sus canales, se supone que existe planes de contingencia. Por lo que, preguntó, sí existía los

planes de contingencia y la facilidad para poder invertir de algún fondo, que en un momento de desastre no lo pueden utilizar, pero en este caso sí, observó, que los planes de contingencia no se habrían activado, o habría lentamente.

Al respecto, hizo las siguientes preguntas, cuántas intervenciones se han realizado a la EPS en el marco de la implementación de los planes de contingencias, cuántas intervenciones hubo en el monitoreo del plan de contingencia que estuvo activado en ese momento, cuánto es el porcentaje dentro de su presupuesto que maneja cada Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento – EPS en la situación de desastres, sí se están utilizando los fondos de inversión a raíz del ciclón Yaku, sí se ha podido recibir la información y de cuántos millones asciende todo ese daño generado por el ciclón; toda vez, que ya se debe de tener a la fecha un mapa de riesgo y haber cuantificado lo que es el daño generado, como también en la región Ancash y oras regiones.

Contestado a las preguntas, el señor GUTIÉRREZ MARTÍNEZ explicó sobre el uso de los recursos que realizan las EPS en una emergencia, el mismo que tiene que informar en un plazo de 7 días. Asimismo, complementó sobre el tema del montó y fondos de inversión que les asiste. Luego explicó sobre las implicancias de la situación de Casma Chimbote a raíz del ciclón Yaku y del presupuesto que le asiste a Chimbote.

La congresista BARBARÁN REYES trató sobre las intervenciones que realiza del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS en un estado de emergencia, ante ello, preguntó si existe actualmente la conexión con esta entidad. Alertó que ante una situación de emergencia estas estén o no en RAT, deberían de brindar información en el momento oportuno para saber de cómo se apoyan entre ellos, por lo que preguntó, quién es la entidad encargada de actualización que sea en el momento.

El señor GUTIÉRREZ MARTÍNEZ explicó sobre las funciones e intervenciones del OTASS como organismo técnico ante una emergencia, además dijo que estas brindan el apoyo, tanto a las empresas que están en el régimen RAT como las que no. Señaló que la OTASS viene realizando coordinaciones con cada una de las EPS para tratar de identificar de cuáles son sus requerimientos. Observó y dijo que un problema central es que no ataca a un lugar aislado, sino de manera simultánea, por lo que aparece necesidades al mismo tiempo, por lo que abarca un gran espacio territorial, el cual obedece de que se requiera importantes equipos para contrarrestar.

Asimismo, refirió que las EPS realizan coordinaciones con el OTASS para que les apoye con los equipos respectivos ante la situación de emergencia. Aclaró que su sector apoya otorgando información cuando se presentan algunas situaciones, es decir, cuando la EPS se hayan comunicado con las oficinas desconcentradas que no van a poder ser atendidos, dada las limitaciones de los equipos que presentan y, eso se traslada a la OTASS para puedan realizar la ayuda respectiva.

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran transmitir sus inquietudes u opiniones respecto de la exposición del superintendente.

Luego, preguntó, sí la Sunass como organismo regulador, podría instar a que cada EPS tenga un hidrojet, 15 motobombas, dada la importancia de su uso en una emergencia, como la que está ocurriendo en estos momentos.

Al respecto, el señor GUTIÉRREZ MARTÍNEZ dijo que las ciudades en el país no están preparadas para estas lluvias y luego explicó sobre las inversiones que realiza las EPS. Seguidamente, ahondó sobre la problemática que implica el ciclón Yaku en los lugares afectados, de las implicancias del uso del hidrojet y sobre los planes de contingencias.

—o—

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE refirió que, en este punto de la agenda, se tendría el tema: *La salubridad de los locales comerciales en plaza lima sur del distrito de chorrillos para la debida protección del consumidor.*

Al respecto, señaló que la semana pasada los consumidores han sido testigos de un video que se viralizó rápida y seguidamente, se proyectó el video, en el cual se visualizó la presencia de roedores en el local comercial Metro de Chorrillos de Lima Sur. Alertó y dijo que el control de la salubridad en los locales comerciales es necesario, por ello se ha invitado al alcalde de la Municipalidad de Chorrillos para que informe sobre las medidas adoptadas y sobre todo de las acciones preventivas que se aplicará para que estos hechos no vuelvan a suceder.

Por otro lado, indicó que también se ha invitado al representante legal de la empresa involucrada, a fin de conocer de las acciones que se adoptaron para salvaguardar la salud e integridad de sus consumidores.

En ese sentido, dio la bienvenida al señor Edgar Enrique Arias Bendezú, gerente de Servicios de Salud de la Municipalidad de Chorrillos, quien viene en representación del alcalde y a señor Roland Jayo, representante de Fiscalización Administrativo de la Municipalidad de Chorrillos. Seguidamente, les otorgó el uso de la palabra en el orden señalado.

El señor ARIAS BENDEZÚ señaló que, una vez recibida la denuncia, acudieron al mercado de Metro de Lima Sur para realizar las acciones de supervisión de control correspondiente, en concordancia a las leyes de municipalidades. Luego de la inspección, se contempló en las actas respectivas las observaciones encontradas, el cual fue de conocimiento del área de fiscalización, quienes realizaron las acciones, que son de conocimiento público, por lo que se procedió al cierre del local hasta que se subsane. Posteriormente, el local comercial comunicó que se levantaron las observaciones, seguido a ello, se le dio permiso para que reabrir su local.

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran transmitir sus inquietudes u opiniones respecto de las acciones realizadas por los funcionarios de la Municipalidad de Chorrillos.

Luego, preguntó sobre el contenido de las observaciones encontradas en el local comercial y cuáles serían las principales, relacionado con el problema mostrado en el video.

El señor ARIAS BENDEZÚ dio detalle de algunas observaciones encontradas en dicho lugar, como las filtraciones, ambientes que necesitaban limpieza, mejores enceres, etc.

El PRESIDENTE instó al funcionario de realizar las funciones de supervisión, fiscalización y se tome las medidas preventivas.

El señor ROLAND JAYO complementando sobre las acciones que se ha realizado ante la supervisión, dijo que luego de la inspección se han abierto varios procedimientos administrativos sancionadores a la empresa y describió algunas que se han encontrado en el local, por lo que se procedió a censurarlo.

El PRESIDENTE dejó constancia que se cursó invitación para su exposición de SENCOSUR, que tiene que ver con los mercados y no han atendido al requerimiento.

—o—

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE sustentó el contenido del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3339/2022-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que

modifica el Decreto Legislativo 702, por el que se aprobaron las normas que regulan la promoción de inversión privada en telecomunicaciones, para otorgar a los usuarios el derecho a recibir una compensación por interrupciones generadas en los servicios públicos de telecomunicaciones.

Al respecto, ahondó en la presentación y refirió que la propuesta ya fue sustentada en la sesión anterior y a pedido de los colegas Jorge Morante y Auristela Obando se pasó a un cuarto intermedio, en el cual se revaluó el tema, por lo que considerando las intervenciones del debate se planteó un nuevo texto sustitutorio que ustedes lo recibieron junto con la agenda. Así que se continuará con el debate y señaló que respecto del nuevo texto sustitutorio que se está consignando la frase *"cuando haya una interrupción en el servicio público de telecomunicaciones por causa atribuible a la empresa operadora, esta devuelve al abonado el pago realizado correspondiente al periodo interrumpido y, además, lo compensa por el tiempo en que no contó con el servicio"*.

Respecto a la causa de la interrupción del servicio de telecomunicaciones, dijo que es importante señalar que la obligación de compensar surge como consecuencia del incumplimiento de la obligación de entregar un servicio ininterrumpido. Si no hubiera culpa o dolo en la entrega del servicio interrumpido, por ejemplo, porque la interrupción se produjo por caso fortuito o fuerza mayor, no habría obligación de compensar.

Señaló que la responsabilidad de la empresa operadora ante las interrupciones se evaluará en las fiscalizaciones que realice el regulador para verificar el cumplimiento de la obligación de compensar, allí podrán aportarse los medios de prueba para exculparse de responsabilidad (porque fue caso fortuito, hecho de un tercero o del propio usuario de darse un caso, etc.).

Sobre el carácter indemnizatorio de la compensación dijo que se debe distinguir primero entre la devolución de lo pagado respecto de la compensación. La primera (devolución) tiene naturaleza distinta; se trata de la restitución del dinero cobrado porque el servicio no fue efectivamente prestado. La compensación administrativa tiene por objeto resarcir al abonado o usuario por la interrupción del servicio (atribuible a la empresa operadora).

Explicó que hay una tercera figura que es la indemnización, la misma que no se pueden establecer en el ámbito del derecho administrativo porque tienen como premisa el establecimiento del daño y del nexo causal entre el sujeto que lo ocasiona y el hecho propio del daño. Toda esta materia probatoria debe establecerse en la vía civil tal y como lo señala el propio código civil en sus normas correspondientes. El derecho administrativo es puramente objetivo, mientras que el nexo causal puede tener elementos subjetivos.

Señaló que se considera que nada impide que una ley, cree un régimen especial para el sector de las telecomunicaciones, como sucede con el sector eléctrico, en el que se reconoce a los usuarios una compensación cuyo carácter es "administrativo"; régimen que forma parte del ordenamiento jurídico desde el año 1992. Es la ley de concesiones eléctricas (LCE) que establece que los usuarios del servicio de público de distribución de electricidad tienen el derecho a recibir una compensación cuando la prestación de dicho servicio presente (i) interrupciones, (ii) racionamientos y/o (iii) cuando se incumplan los estándares de calidad previstos normativamente.

Dijo que tal como señala el artículo 86 de la LCE dispone que los usuarios del sector eléctrico deberán ser compensados, por el concesionario de distribución, en caso se presenten interrupciones parciales y/o totales del suministro eléctrico, por un periodo consecutivo mayor a cuatro (4) horas.

Asimismo, explicó que el contrato de concesión suscrito por el estado peruano con la empresa telefónica del Perú S.A.A., para la prestación del servicio de telefonía fija local, establece un

régimen de compensación al abonado ante la interrupción del servicio, tal como se detalla en el literal d) de la sección 8.3 de la cláusula 8. Obligaciones de la empresa concesionaria.

Complementariamente, dijo que debe indicarse que la posibilidad de aplicar un régimen similar al vigente para el sector energía ha sido analizado también por la Defensoría del Pueblo en el Informe de adjuntía 021-2022-DP/AMASPPI: "en defensa de las personas afectadas por cortes del servicio de agua y aniegos: aportes para el diseño de un mecanismo de compensación por daños" del mes de diciembre de 2022, en el cual se resaltan que pone en relieve lo complicado y oneroso que resultaría para un usuario de a pie acudir al poder judicial para exigir el pago de una indemnización.

Señaló que las disposiciones que determinan la forma de cálculo y condiciones, y en qué casos se realiza la compensación, a las que se refiere el dictamen, al estar contenidas en una norma, deberán ser pre publicadas para comentarios de los interesados y sometidas al proceso de análisis de impacto regulatorio; con lo cual se garantizará el carácter técnico de tales disposiciones (esta es una preocupación expuesta en el video). asimismo, cualquier orden del regulador que exija hacer efectiva la compensación, podrá ser recurrida por las empresas operadoras ante el poder judicial; tal como sucede ahora con los procedimientos sancionadores por incumplir la obligación de devolver.

Destaco una vez más que lo que se está regulando es una compensación administrativa que no es lo mismo que una indemnización; así mismo de debe tener presente que estamos ante la regulación de un servicio público, que es el de telecomunicaciones, el mismo que se da en el marco de contratos de concesión suscritos por el estado peruano con las empresas operadoras. Así en resumen dijo que: a) La figura de la compensación administrativa ya existe para el caso del servicio de energía que también es un servicio público y que no ha sido cuestionado de inconstitucional; b) El contrato de concesión entre el estado peruano y la empresa telefónica ya establece compensaciones para el servicio de telefonía fija y que tampoco ha sido cuestionado de inconstitucional y c) Los países de la región hacen más de 10 años atrás ya establecen compensaciones administrativas en los servicios de telecomunicación móvil, tal como consta en el dictamen.

En consecuencia, dijo que no existe ningún impedimento para fijar compensaciones a favor de los usuarios y será el organismo regulador, en este caso el Osiptel, quien tendrá que determinar, a través de un procedimiento con calidad regulatoria, los casos en que proceda la compensación al abonado o usuario del servicio.

Finalmente, señaló que no se puede dejar a que sea un acuerdo entre usuario y empresa operadora por la situación de asimetría en la que ambos actores se encuentran en una relación de consumo, considerando además que estos contratos son generalmente contratos por adhesión.

Culminada la sustentación, el PRESIDENTE abrió el debate e invitó a los congresistas miembros de la Comisión a intervenir.

No habiendo intervenciones, el PRESIDENTE dio por concluido el debate y dispuso someter a votación el dictamen recaído en el Proyecto de Ley **3339/2022-CR** que, con texto sustitutorio, propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 702, por el que se aprobaron las normas que regulan la promoción de inversión privada en telecomunicaciones, para otorgar a los usuarios el derecho a recibir una compensación por interrupciones generadas en los servicios públicos de telecomunicaciones.

Sometido a votación nominal el dictamen fue aprobado por unanimidad, con 9 votos a favor de los señores congresistas miembros titulares de la Comisión VARAS MELÉNDEZ, Elías Marcial; TUDELA GUTIÉRREZ, Adriana; BARBARÁN REYES, Rosangella; MORANTE FIGARI, Jorge; OBANDO MORGAN, Auristela; CICCIA VÁSQUEZ, Miguel Ángel; BERMEJO ROJAS,

Guillermo; BAZAN NARRO, Sigrid y CORDERO JON TAY, María (accesitaria en reemplazo del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay). Se deja constancia que los congresistas Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, Rosangella Andrea Barbarán Reyes y Jorge Alberto Morante Figari manifestaron su voto a favor con reserva.

—o—

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE sustentó el contenido del predictamen recaído en los proyectos de ley 3316/2022-CR y 3734/2022-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que fortalece la protección y defensa del consumidor en las municipalidades distritales y municipalidades provinciales.

Al respecto, complementando la sustentación, señaló que la presente proposición de ley, propone facilitar el acceso de los consumidores a información oportuna y especializada sobre sus derechos, establecidos por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pues uno de los grandes problemas es que los consumidores no conocen sus derechos y no ha habido un esfuerzo estatal para difundirlos a nivel nacional.

Dijo que las municipalidades distritales y provinciales tienen competencias en temas de consumo y además, se encuentran representadas en el Consejo Nacional de protección del consumidor del Indecopi a través de la Asociación de Municipalidades del Perú – Ampe. Las competencias para las municipalidades distritales y provinciales que forman parte del sistema nacional integrado de protección del consumidor creado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, están bajo la rectoría del Indecopi.

Asimismo, refirió que se recibieron opiniones positivas del Indecopi, así como observaciones que se han considerado, así mismo de la Presidencia del Consejo de Ministros y de las asociaciones de consumidores de Aspec y de la Cámara de Comercio de Lima.

Explicó que es importante mencionar, que el texto sustitutorio ha considerado cada opinión y ha aceptado muchas de las observaciones y sugerencias de redacción, no contiene cambios en la organización de las municipalidades, se ha respetado el principio de autonomía de los gobiernos locales, pues lo que promueve es la coordinación entre las municipalidades y el Indecopi. Tampoco se hace necesaria las modificaciones al manual de organización y funciones (MOF) y al reglamento de organización y funciones (ROF) de las municipalidades.

Dijo que se propone que las municipalidades distritales y provinciales se constituyan en el área de promoción y coordinación para la constitución de juntas arbitrales, de acuerdo a lo establecido por el sistema de arbitraje de consumo creado por el código.

En ese contexto, aclaró que de aprobarse la norma, será una herramienta valiosa para que el Indecopi y las municipalidades distritales y provinciales brinden un mejor servicio de atención al consumidor peruano y beneficiará a los aproximadamente 34 millones de consumidores a nivel nacional, ya que se logrará una mayor cobertura de los servicios de orientación a los consumidores, podrán recibir una protección oportuna, información y orientación accesible, sobre sus derechos como consumidores y sobre las vías de solución de controversias existentes en materia de consumo.

Explicó que el dictamen también tiene impacto positivo para el estado, dado que, al brindar mayor información a los consumidores, y realizar apoyo a instituciones públicas y privadas en el desarrollo y ejecución de proyectos y actividades que promuevan la protección y defensa de los consumidores, se observará una reducción en los conflictos de consumo y con ello, en los recursos que el Estado debe destinar para la solución de los mismos.

Mencionó que las municipalidades no tendrán ningún gasto extraordinario, por cuanto estas ya cuentan con unidades, oficinas o módulos de atención al ciudadano, los cuales a la fecha son atendidos por personal del municipio, los cuales, mediante la presente propuesta serán

capacitados de forma gratuita por el Indecopi para fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores.

Consideró que tampoco hay un gasto extraordinario para el Indecopi pues esta institución ya cuenta con un centro de capacitación, el mismo que ya viene cumpliendo sus funciones con las asociaciones de consumidores y ciudadanos en derechos de defensa del consumidor, por ello la aplicación de la norma no irrogaría mayores costos para el estado.

Consideró que el dictamen solo trae beneficios para los consumidores, para el mercado, para las municipalidades y para el Estado, generando mayor competitividad para el país y beneficiando principalmente a los ciudadanos de zonas más alejadas para una tutela efectiva de sus derechos como consumidores y usuarios.

Culminada la sustentación, el PRESIDENTE abrió el debate e invitó a los congresistas miembros de la Comisión a intervenir.

El congresista MORANTE FIGARI refirió que le parece buena la propuesta legislativa, señalando que, si bien los municipios ya tienen esas facultades establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo, a través de normas se regula mejor. Considerando que con esta norma los municipios podrán coordinar de forma directa con el Indecopi y evitará que se pueda entregar información errada por la interpretación del código del consumidor. Además, esta forma se permitirá que los consumidores y los municipios tengan una mayor orientación, ya que el Indecopi presidirá de alguna manera, para poder tener un mejor trabajo de todo el tema del consumidor.

No habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE dio por concluido el debate y dispuso someter a votación el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 3316/2022-CR y 3734/2022-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que fortalece la protección y defensa del consumidor en las municipalidades distritales y municipalidades provinciales.

Sometido a votación nominal el dictamen fue aprobado por unanimidad, con 9 votos a favor de los señores congresistas miembros titulares de la Comisión VARAS MELÉNDEZ, Elías Marcial; MORANTE FIGARI, Jorge; OBANDO MORGAN, Auristela; BARBARÁN REYES, Rosangella; BERMEJO ROJAS, Guillermo; BAZAN NARRO, Sigrid; CICCIA VÁSQUEZ, Miguel Ángel y CORDERO JON TAY, María (accesitaria en reemplazo del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay).

—o—

Continuando con el orden del día de la agenda, el PRESIDENTE dio inició con la sustentación del contenido del predictamen de no aprobación recaído en el Proyecto de Ley 022/2021- CR, proyecto de reforma constitucional, por el que se propone la modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Perú.

Al respecto, indicó que en la elaboración del predictamen se evaluaron las opiniones de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Indecopi, del Osinergmin, de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – Comex y de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía. Todas las opiniones técnicas recibidas concluyeron que la iniciativa legislativa no es viable, pues transgrediría la constitución y la normatividad vigente del ordenamiento jurídico.

Mencionó que la propuesta propone la reforma constitucional de los artículos 62 ,65 y 66 dado que contravendrían lo dispuesto en los artículos 58, 59, 137, 206 de la constitución política del Perú, así mismo el tribunal constitucional ha señalado en el Expediente 50-2004-AI/TC, en sus fundamentos del 72 al 77, que el Congreso de la República no puede hacer uso de la reforma constitucional para variar el sistema democrático de gobierno, para sustituir el régimen representativo, para modificar la constitución económica o para alterar el principio de alternancia del gobierno a tenor de los artículos 1, 3, 43 y 58 de la constitución. Ello,

precisamente, para evitar que los órganos constituidos en ejercicio del poder constituyente derivado que le ha sido acordado constitucionalmente, produzcan cualquier modificación de esos principios sustanciales, estos han quedado fuera del alcance del constituyente derivado. en consecuencia, aquella reforma que no se observara dichos limites, o simplemente los ignora, resultaría ilegitima en términos constitucionales.

Finalmente, dijo que en ese orden de ideas, se advierte que, al contener el proyecto de ley una medida restrictiva del derecho fundamental de la libertad para contratar, correspondería que la misma supere el test de proporcionalidad, no obstante, revisada la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, no se evidencia que se haya efectuado el test de proporcionalidad, por lo tanto, podemos concluir que la misma no ha logrado determinar la legitimidad de la medida restrictiva que propone.

Culminada la sustentación, el PRESIDENTE abrió el debate e invitó a los congresistas miembros de la Comisión a intervenir.

No habiendo intervenciones, el PRESIDENTE dio por concluido el debate y dispuso someter a votación el dictamen de no aprobación recaído en el Proyecto de Ley 022/2021- CR, proyecto de reforma constitucional, por el que se propone la modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Perú.

Sometido a votación nominal el dictamen de no aprobación fue aprobado por mayoría, con 8 votos a favor de los señores congresistas miembros titulares de la Comisión VARAS MELÉNDEZ, Elías Marcial; TUDELA GUTIÉRREZ, Adriana; BARBARÁN REYES, Rosangella; MORANTE FIGARI, Jorge; OBANDO MORGAN, Auristela; CICCIA VÁSQUEZ, Miguel Ángel; BERMEJO ROJAS, Guillermo; CORDERO JON TAY, María (accesitaria en reemplazo del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay) y con la votación en contra de la congresista BAZAN NARRO, Sigrid.

—o—

Como último punto de orden del día de la agenda, el PRESIDENTE prosiguió a sustentar el contenido del predictamen de no aprobación recaído en el Proyecto de Ley 2800/2022-CR que propone la ley de protección y defensa de la denominación "Machupicchu" correspondiente al santuario histórico de Machupicchu.

Al respecto, señaló que la iniciativa legislativa en mención ha recibido las opiniones del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Indecopi y del Gobierno Regional del Cusco. Luego, indicó que el proyecto de ley propone que la denominación "Machupicchu" no pueda usarse en ningún otro monumento, sea natural o artificial, sin especificar otros supuestos en el ámbito del registro de marcas y nombres comerciales podría aplicar, lo cual podría acarrear problemas de incertidumbre jurídica para los agentes económicos, por ejemplo, a quienes son titulares de derechos de propiedad industrial.

Seguidamente, explicó que teniendo en consideración lo regulado por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual constituye el "régimen común sobre propiedad industrial" no contempla la prohibición de registro de marcas y nombres comerciales por el solo hecho de estar constituidas por símbolos religiosos o monumentos históricos, toda vez que, actualmente el Indecopi cuenta con marcas inscritas que incluyen en su conformación distintas denominaciones que aluden a monumentos históricos o restos arqueológicos. Sobre ello, se tiene, por ejemplo: *Machu picchu reservations* y logotipo, *Machu picchu Sanctuary Lodge* y logotipo, protector de Machu picchu y logotipo, *Machu picchu a1* y logotipo, T*he grand Machupicchu train* y logotipo, *Machupicchu Sport* y logotipo, entre otros.

Dijo que se ha evaluado la opinión emitida por el Ministerio de Cultura y coincide al señalar que *el verdadero santuario histórico no se perjudica, ni perjudicará en manera alguna si su nombre es utilizado para otras actividades económicas*.

Por otro lado, mencionó que el Indecopi al igual que el Ministerio de Cultura considera que el proyecto de ley vulnera el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al exceder lo dispuesto en la Decisión 486. además, genera incertidumbre jurídica de si su aplicación afecta únicamente el régimen de solicitudes de registro o si también el régimen de nulidad de registros.

Señaló que hoy por hoy es posible evitar el registro como marca o nombre comercial de signos que pueden resultar descriptivos o engañosos en relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, así como contrarios a la leal y honesta competencia.

Explicó que el Gobierno Regional del Cusco reconoce no tener competencia, pero no analiza que se vulneraría el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. La iniciativa legislativa adolece de un estudio cuantitativo que permita evaluar el impacto y efecto de la propuesta por lo cual no se pueden cuantificar los costos.

Finalmente, dijo que siendo la esencia de la propuesta normativa velar por un monumento que constituye patrimonio cultural de la nación, se concluye que la propuesta legislativa vulneraría el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina al exceder lo dispuesto en la Decisión 486 "régimen sobre la propiedad industrial". Solo sería posible prohibir el registro como marca o nombre comercial de signos que pueden resultar descriptivos o engañosos en relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, así como contrarios a la leal y honesta competencia, razón por la cual se presenta a su consideración un dictamen negativo.

Culminada la sustentación, el PRESIDENTE abrió el debate e invitó a los congresistas miembros de la Comisión a intervenir.

No habiendo intervenciones, el PRESIDENTE dio por concluido el debate y dispuso someter a votación el dictamen de no aprobación recaído en el Proyecto de Ley 2800/2022- CR que propone la ley de protección y defensa de la denominación "Machupicchu" correspondiente al santuario histórico de Machupicchu.

Sometido a votación nominal el dictamen de no aprobación fue aprobado por unanimidad, con 9 votos a favor de los señores congresistas miembros titulares de la Comisión VARAS MELÉNDEZ, Elías Marcial; TUDELA GUTIÉRREZ, Adriana; BARBARÁN REYES, Rosangella; MORANTE FIGARI, Jorge; OBANDO MORGAN, Auristela; CICCIA VÁSQUEZ, Miguel; BERMEJO ROJAS, Guillermo; BAZAN NARRO, Sigrid y CORDERO JON TAY, María (accesitaria en reemplazo del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay).

Finalmente, el PRESIDENTE solicitó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, y no habiendo oposición, el acta fue aprobado por unanimidad.

En este estado, el PRESIDENTE levantó la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Eran las 12 h 48 min.

ELÍAS MARCIAL VARAS MELÉNDEZ
Presidente

ADRIANA TUDELA GUTIÉRREZ
secretaria

La trascripción magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del Diario de Debates del Congreso de la República es parte integrante de la presente Acta.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VARAS MELENDEZ Elias Marcial FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/03/2023 17:47:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2023 10:50:17-0500